

Invertir en la salud de los trabajadores agrícolas

La investigación puede ayudar a proteger a quienes producen nuestros alimentos

Los 2,4 millones de trabajadores agrícolas que se estima trabajan en las granjas y los ranchos de Estados Unidos enfrentan una serie de riesgos, desde el uso de equipos peligrosos hasta la exposición a pesticidas tóxicos y al calor extremo y más (NASS 2019; Goldman et al. 2021). La legislación estadounidense y los empleadores de la industria agrícola ofrecen pocas protecciones a estos trabajadores, muchos de los cuales son inmigrantes y personas de color que tienen que lidiar con un racismo sistémico en ese sector y en la sociedad en general. Los sistemas de discriminación y explotación económica han logrado institucionalizar el mal ambiente de trabajo y las altas incidencias de lesiones y enfermedades en la agricultura, una industria que depende en gran medida de la mano de obra de poblaciones inmigrantes y personas de color. Los bajos salarios, la precariedad de las viviendas, el acceso insuficiente al cuidado de la salud y las escasas protecciones legales debido al estatus migratorio son algunas de las condiciones que afectan al bienestar de estos trabajadores, incluyendo su salud mental y su seguridad alimentaria y nutricional (Goldman et al. 2021; Elver 2018).

Los responsables de las políticas cuentan con pruebas sustanciales de los riesgos laborales en esta industria, incluyendo experiencias de primera mano de los trabajadores agrícolas, pero sigue sin haber datos suficientes. En los últimos años ha aumentado la necesidad de investigar esta situación y de tomar acciones firmes, ya que las amenazas del calor extremo y otros impactos relacionados con el cambio climático se han intensificado y la pandemia del COVID-19 ha aumentado los riesgos para trabajadores agrícolas (Ferguson, Dahl y DeLonge 2019; Lusk y Chandra 2021). Los responsables de las políticas, los propietarios de las granjas y los proveedores de servicios de salud deben actuar urgentemente basándose en los datos disponibles, mientras obtienen más información sobre cómo reducir los riesgos en el lugar de trabajo y proteger la salud de los trabajadores.

El gobierno federal juega un papel importante para impulsar la investigación y las intervenciones con el fin de proteger a los trabajadores agrícolas. Aunque realizan una labor que sustenta a

la industria alimentaria y agrícola y que contribuyó un promedio de \$1.223 billones de dólares a la economía estadounidense entre los años fiscales 2019 y 2022, los trabajadores agrícolas están expuestos a riesgos de salud y seguridad debido al uso de pesticidas tóxicos, al calor extremo y a los entornos de trabajo peligrosos (BEA, s.f.). Sin embargo, las agencias federales que supervisan la agricultura y la salud, incluyendo el Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura (NIFA por sus siglas en inglés), los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), solamente invierten \$16,2 millones de dólares al año en actividades de investigación y educación sobre la salud de los trabajadores agrícolas, *lo que equivale aproximadamente a \$6,75 por trabajador*, esto según un nuevo análisis de la Unión de Científicos Conscientes (UCS, por sus siglas en inglés).

De un total de 55 proyectos financiados durante esos cuatro años, el NIFA financió 32 proyectos, los NIH 15 y los CDC 7; el Departamento de Asuntos de Veteranos financió solamente un proyecto. Entre los temas abordados, 21 proyectos se enfocaron en cuestiones de exposición ambiental, 15 en lesiones, 12 en enfermedades transmisibles y 12 en enfermedades crónicas. Diez proyectos se enfocaron en la salud mental y el consumo de sustancias, seis en los animales, insectos y plagas y cinco en la discapacidad. Un proyecto se enfocó en la inseguridad alimentaria (Tabla 1).

En cuanto a las poblaciones objetivo, cinco proyectos incluyeron a jóvenes trabajadores agrícolas y otros cinco se enfocaron en trabajadores agrícolas con discapacidades. Tres proyectos mencionaron específicamente a los trabajadores agrícolas veteranos. Ninguno incluyó a las mujeres, a los trabajadores agrícolas LGBTQ+, de género no conforme o no binario como poblaciones de interés. Solamente 13 proyectos contemplaron a los trabajadores agrícolas como la única población objetivo.

Nuestro análisis intenta identificar las principales fuentes probables de financiamiento federal para las investigaciones sobre la salud de los trabajadores agrícolas (no todas las fuentes) y señala oportunidades significativas para mejorar la amplitud y el

TABLA 1. Proyectos por temas y subtemas

Tema y subtema	Proyectos
Exposición ambiental	21
pesticidas/productos químicos (8), calor (5), contaminación del aire (5), plomo (1), incendios forestales (1), ruido (1)	
Lesiones	15
no especificadas (8), pérdida de la audición (2), lesión renal aguda (2), muerte (1), caídas (1), trastornos musculoesqueléticos (1)	
Enfermedades transmisibles	12
COVID-19 (7), gripe (2), VIH/SIDA (2), virus respiratorios (1)	
Enfermedades crónicas	12
enfermedad pulmonar (4), enfermedad cardiovascular (3), prediabetes/diabetes (2), enfermedad renal crónica (2), cáncer colorrectal (1)	
Salud mental y uso de sustancias	10
estrés (4), abuso de sustancias (3), no especificado (2), violencia/trauma (1)	
Salud y seguridad en general	9
Animales, insectos y plagas	6
mosquitos (3), resistencia a los antibióticos (2), hormigas (1)	
Discapacidad	5
Seguridad alimentaria y nutricional	1
Otros	4
problemas neurológicos (2), problemas gastrointestinales (1), fatiga y esfuerzo físico (1)	

Nota: Algunos proyectos abordaron más de un tema y/o subtema, por lo que el conteo total es mayor al número total de proyectos que se incluyeron en el estudio de la UCS.

alcance de los programas de investigación, educación y extensión que apoyan su salud. Estas oportunidades incluyen el aumento del financiamiento destinado a las investigaciones sobre la salud de los trabajadores agrícolas en el NIFA a través de la Ley Agrícola (*Farm Bill*) del 2023. Los fondos adicionales para

las investigaciones podrían provenir de los NIH y los CDC. Se necesita un apoyo adicional para priorizar la investigación de los impactos acumulativos del cambio climático y la exposición a múltiples pesticidas, además de generar oportunidades para servir a las poblaciones menos representadas en las investigaciones actuales sobre la salud de los trabajadores agrícolas, incluyendo las poblaciones indígenas, las mujeres, los agricultores de edad avanzada y los trabajadores agrícolas LGBTQ+, de género no conforme o no binario. De igual manera, el gobierno federal debe proporcionar datos transparentes, consistentes y frecuentemente actualizados sobre el financiamiento federal.

Por último, es fundamental facilitar las asociaciones entre las instituciones de investigación y las comunidades de trabajadores agrícolas para asegurar que los trabajadores agrícolas ocupen un lugar central en las investigaciones relacionadas con los temas que les afectan. Debido a la escasa información que existe sobre las subvenciones actuales, fue difícil evaluar si los que recibieron fondos de investigación colaboraban con los trabajadores agrícolas o sus organizaciones y determinar de qué manera lo hacían.

Además de estas necesidades de investigación, para poder proteger a los trabajadores agrícolas es necesario realizar cambios en las políticas, incluyendo mejorar reglamentos sobre el uso de pesticidas y otros productos químicos en la agricultura; proveer mayores protecciones laborales; requerir una regulación eficaz de las industrias que producen, distribuyen y utilizan agroquímicos; y garantizar derechos y protecciones para los jornaleros agrícolas sin obstar su estatus migratorio, dada la importancia de sus labores y la necesidad de abandonar prácticas explotadoras en la agricultura, mientras se fragua la manera de proveer la ciudadanía—o el camino hacia la ciudadanía—para aquellos trabajadores quienes la deseen. También es esencial reforzar la aplicación de las normas de salud y seguridad en el trabajo, incluyendo el saneamiento en los campos, la inclusión de los trabajadores agrícolas en las leyes salariales y un mayor acceso a los beneficios y cuidados de salud (Donley 2019; APHA 2017; Farmworker Justice, s.f.).

Estos cambios en el financiamiento y las políticas en conjunto podrían lograr avances significativos en la protección de la salud de las personas que producen nuestros alimentos, además de garantizar la salud y la sostenibilidad a largo plazo del sistema alimentario estadounidense.